Contenido

**Contenido**

[A N T E C E D E N T E S 2](#_heading=h.44sinio)

[I. Presentación de las solicitudes de información 2](#_heading=h.2jxsxqh)

[II. Respuesta del Sujeto Obligado 3](#_heading=h.z337ya)

[III. Interposición del Recurso de Revisión 4](#_heading=h.3j2qqm3)

[IV. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto 5](#_heading=h.1y810tw)

[C O N S I D E R A N D O S 12](#_heading=h.2bn6wsx)

[PRIMERO. Competencia 12](#_heading=h.qsh70q)

[SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento 13](#_heading=h.3as4poj)

[TERCERO. Determinación de la Controversia 14](#_heading=h.1pxezwc)

[CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública 16](#_heading=h.49x2ik5)

[QUINTO. Estudio de Fondo 17](#_heading=h.2p2csry)

[SEXTO. Versión pública 24](#_heading=h.147n2zr)

[SÉPTIMO. Decisión 35](#_heading=h.3o7alnk)

[R E S U E L V E 36](#_heading=h.23ckvvd)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico conformado con motivo de los Recursos de Revisión **03811/INFOEM/IP/RR/2024 y 03812/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuestos por la persona Recurrente o Particular, en contra de las respuestas del Sujeto Obligado, **Secretaría de Movilidad**, a las solicitudes de acceso a la información pública**00332/SMOV/IP/2024** y **00331/SMOV/IP/2024**, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# A N T E C E D E N T E S

## I. Presentación de las solicitudes de información

El diez de mayo de dos mil veinticuatro, el Particular presentó dos solicitudes de acceso a la información pública con números de folio **00332/SMOV/IP/2024** y **00331/SMOV/IP/2024**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo sucesivo, el SAIMEX, ante la **Secretaría de Movilidad**, en los siguientes términos:

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*Todas las capacitación otorgadas por su Secretaría a policías, instituciones pública como teleton o a cualquier instituciones públicas o privadas entregando el material y comedido de esas capacitación, fecha de la capacitación, el nombre de la personas capacitadas, su aviso de privacidad para recabar nuestros datos, fecha de la capacitación, presupuesto asignado para esas capacitación y comprobación de esos recursos utilizados.“*

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*Cuantos operadores de transporte público sean capacitado en los últimos 9 mese el programa de capacitación implementado, que escuela o institución implementa la capacitación, la constancia del operador capacitado con nombre y ruta o sitio al que pertenece.”*

***MODALIDAD DE ENTREGA “****A través del SAIMEX”*

## II. Respuesta del Sujeto Obligado

Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, elSujeto Obligado, a través del SAIMEX respondió a las dos solicitudes en los siguientes términos:

**Respuesta a la solicitud 00332/SMOV/IP/2024 relacionada al Recurso de Revisión 03811/INFOEM/IP/RR/2024**

*Respecto a su solicitud con número de folio 00332/SMOV/IP/2024 presentada ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (SAIMEX), en donde se nos solicita: Todas las capacitación otorgadas por su Secretaría a policías, instituciones pública como teletón o a cualquier instituciones públicas o privadas entregando el material y comedido de esas capacitación, fecha de la capacitación, el nombre de la personas capacitadas, su aviso de privacidad para recabar nuestros datos, fecha de la capacitación, presupuesto asignado para esas capacitación y comprobación de esos recursos utilizados. Al respecto me permito dar respuesta en competencia del Instituto del Transporte en los siguientes términos: Después de una exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y electrónicos que obran en este Instituto del Transporte del Estado de México, no se localizó la información solicitada. Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. En competencia del Instituto del Transporte, por lo establecido en el Artículo 146 y 147 del Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México, el objeto del Instituto del Transporte del Estado de México es sólo la investigación, elaboración de estudios, modernización y desarrollo de los sistemas de transportación pública en la entidad y los actos que emita el Instituto no constituyen actos administrativos decisorios, por lo que después de una búsqueda exhaustiva no se cuenta con la información solicitada.*

**Respuesta a la solicitud 00331/SMOV/IP/2024 relacionada al Recurso de Revisión 03812/INFOEM/IP/RR/2024**

*Respecto a su solicitud con número de folio 00331/SMOV/IP/2024 presentada ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (SAIMEX), en donde se nos solicita: Cuantos operadores de transporte público sean capacitado en los últimos 9 mese el programa de capacitación implementado, que escuela o institución implementa la capacitación, la constancia del operador capacitado con nombre y ruta o sitio al que pertenece. Al respecto me permito dar respuesta en competencia del Instituto del Transporte en los siguientes términos: Después de una exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y electrónicos que obran en este Instituto del Transporte del Estado de México, no se localizó la información solicitada. Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. En competencia del Instituto del Transporte, con fundamento en lo vertido en el Artículo 14, Artículo 19 fracción V, IX del Reglamento Interno del Instituto de Transporte del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México el 3 de octubre de 2005, y el Manual General de Organización del Instituto de Transporte del Estado de México publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 13 de febrero de 2009 apartado VII y el artículo 146 del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México.*

## III. Interposición del Recurso de Revisión

El veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, a través del SAIMEX, Recurso de Revisión interpuesto por la persona Recurrente, en contra de la respuesta por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:

**Interposición del Recurso de Revisión 03811/INFOEM/IP/RR/2024 en respuesta a la solicitud 00332/SMOV/IP/2024**

***ACTO IMPUGNADO***

*Dicen que no localizan información cuando ellos mismo la promocionan en sus redes”*

***RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*El instituto del transporte siempre niega la información, dicen no tener y esllo la publican”*

**Interposición del Recurso de Revisión 03812/INFOEM/IP/RR/2024 en respuesta a la solicitud 00331/SMOV/IP/2024**

***ACTO IMPUGNADO***

*No entrega la información cuando es de conocimiento público que se promociono la capacitación”*

***RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*El instituto siempre niega la información si cuenta con una áreas de capacitación como dicen no tener”*

## IV. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto

**a) Turno del Medio de Impugnación**

El veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, el SAIMEX, asignó el número de expediente **03811/INFOEM/IP/RR/2024,** al medio de impugnación y lo turnó al Comisionado Ponente Luis Gustavo Parra Noriega, así como el recurso de revisión **03812/INFOEM/IP/RR/2024,** que se turnó a la Comisionada Sharon Cristina MoralesMartínez, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión**

Por acuerdos de veintiséis y veinticuatro de junio, notificados el veintiocho y veinticuatro de junio, de dos mil veinticuatro respectivamente, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por la persona Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado**

El Sujeto Obligado, sobre ambas solicitudes de acceso a la información, aportó la siguiente información, en la etapa de manifestaciones:

Al Recurso de Revisión **03811/INFOEM/IP/RR/2024**, remitió el nueve de julio de dos mil veinticuatro a través del cual remitió la siguiente información:

**INFORME JUSTIFICADO 3811.pdf.** Documento de tres fojas, firmado por el Titular de la Unidad de Transparencia, que, en lo central, considera lo siguiente:

*“…*

*ÚNICO: Sirva lo expresado como razones suficientes para que esta autoridad resolutora, en términos del artículo 186 fracción I, y 192 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se CONFIRME la respuesta presentada por este Sujeto Obligado a la solicitud primigenia y se tenga por presentada la respuesta de este Sujeto Obligado, a través de este Informe Justificado para todos los efectos legales correspondientes.”*

**OFICO DIPPE.pdf.** Documento de dos fojas, firmado por la Subdirectora de Normatividad y Capacitación del Instituto de Transporte del Estado de México, que contiene la siguiente información:

*“…*

*Por lo establecido en el Artículo 146 y 147 del Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado, el objeto del Instituto del Transporte del Estado de México es la investigación de estudios, modernización y desarrollo de los sistemas de transportación pública en la entidad y los actos que emita el instituto no constituyen actos administrativos decisorias.*

*…*

*Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en este Instituto del Transporte del Estado de México, no se localizó la información solicitada.*

***Esta respuesta se deriva de que este Instituto no ha tenido intervención de algún programa ejecutorio.***

*Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes*

Al Recurso de Revisión **03812/INFOEM/IP/RR/2024**, remitió el tres de julio de dos mil veinticuatro un documento de nombre **Informe Justificado 3812.pdf**, que contiene en lo central la ratificación de su respuesta.

**d) Manifestaciones**

El Particular, durante el plazo de ley para emitir expresión alguna que a su derecho convenga, fue omiso en realizar pronunciamiento alguno.

Al respecto, se debe señalar que si bien, en el sistema aparece que tres archivos fueron subidos por el Particular, estos, en realidad fueron cargados al SAIMEX por el Sujeto Obligado, pero por un error técnico del Sistema, se cargó en un apartado equivocado.

**e) Acumulación de los Recursos de Revisión**

Mediante acuerdo tomado por el Pleno de este Instituto en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el tres de julio de dos mil veinticuatro se decretó la acumulación del Recurso de Revisión **03812/INFOEM/IP/RR/2024** al diverso **03811/INFOEM/IP/RR/2024**, por ser este último el más antiguo.

Este acuerdo fue notificado a las partes el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.

**f) Ampliación de plazo**

El catorce de agosto de dos mil veinticuatro, el Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó ampliar por un plazo razonable, el plazo para resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa; acto que fue notificado a las partes en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el SAIMEX.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”**, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

**“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”**, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**g) Cierre de instrucción.** El doce de noviembre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes, mediante el SAIMEX, el mismo día.

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

# C O N S I D E R A N D O S

## PRIMERO. Competencia

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 56 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento

De las constancias que forma parte del Recurso de Revisión que se analiza, se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda.

**Causales de improcedencia**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente (acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “IMPROCEDENCIA.” (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262), el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

En el presente caso, **no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia** establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que: este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por la persona Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo.

**Causales de sobreseimiento**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

Sobre el tema, el artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza algún supuesto de sobreseimiento; lo anterior, en virtud de que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que la Recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, haya quedado sin materia.

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

## TERCERO. Determinación de la Controversia

De las constancias digitales, podemos determinar que el Particular, requirió la siguiente información:

Sobre todas las capacitaciones otorgadas a policías, instituciones públicas como teletón o a cualquier institución pública o privada:

* 1. Material y comedido de esas capacitaciones
  2. Fecha de la capacitación
  3. Nombre de las personas capacitadas
  4. Aviso de privacidad para recabar datos
  5. Presupuesto asignado para esas capacitaciones
  6. Documentos soporte de la erogación de recursos.

Sobre todas las capacitaciones otorgadas a operadores de transporte público en los últimos 9 meses (del diez de agosto de dos mil veintitrés al diez de mayo de dos mil veinticuatro):

* 1. Cuantos operadores han sido capacitados.
  2. Escuela o institución que implementa la capacitación.
  3. Constancias de los operadores capacitados, identificados con nombre, ruta y/o sitio al que pertenece.

En respuesta, el Sujeto Obligado, respondió que no cuenta con información, esto después de haber realizado una búsqueda en sus archivos, lo que generó inconformidad en el Particular.

En este contexto, el Recurso de Revisión es procedente en términos del artículo 179, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que contempla que el recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de **-la entrega de información incompleta-.**

## CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública

El artículo 6°, Apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

## QUINTO. Estudio de Fondo

Así una vez reproducidos los antecedentes, podemos delimitar la información solicitada en los siguientes puntos:

Sobre todas las capacitaciones otorgadas a policías, instituciones públicas como teletón o a cualquier institución pública o privada:

* 1. Material y comedido de esas capacitaciones
  2. Fecha de la capacitación,
  3. Nombre de las personas capacitadas
  4. Aviso de privacidad para recabar datos
  5. Presupuesto asignado para esas capacitaciones
  6. Documentos soporte de la erogación de recursos.

Sobre todas las capacitaciones otorgadas a operadores de transporte público en los últimos 9 meses (del diez de agosto de dos mil veintitrés al diez de mayo de dos mil veinticuatro):

* 1. Cuantos operadores han sido capacitados.
  2. Escuela o institución que implementa la capacitación.
  3. Constancias de los operadores capacitados, identificados con nombre, ruta y/o sitio al que pertenece.

Sobre estos puntos solicitados, el Sujeto Obligado, respondió que el Instituto del Transporte, informó que después de una exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y electrónicos, no se localizó la información solicitada y sustentó su competencia en los artículos 146 y 147 del Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México.

En este contexto el Particular se inconformó de la totalidad de la respuesta y refirió que era de conocimiento público las capacitaciones realizadas por el Sujeto Obligado.

Por su parte, Secretaría de Movilidad, ratificó su respuesta a través del informe justificado, por lo cual se debe analizar la procedencia del derecho.

Periodo de búsqueda. En primer aspecto, se debe delimitar el periodo de búsqueda de la información, por cuanto refiere a la solicitud 00332/SMOV/IP/2024, no se delimitó por el Particular, por lo que se debe considerar el criterio de interpretación emitido por el INAI con clave de control SO/003/2019, que contempla que en el supuesto de que el Particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información o existan elementos para determinarlo, el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.

Sobre la solicitud 00331/SMOV/IP/2024, el Particular señaló el periodo de nueve meses considerando la fecha de la solicitud, por lo que el periodo es determinable.

Servidor Público que atendió la solicitud. Quien se pronunció en respuesta fue el Instituto del Transporte del Estado de México quien expresó no contar con la información y tener la competencia de conformidad con los artículos 146 y 147 del Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México, que contempla:

*ARTÍCULO 146.- Se crea el Instituto del Transporte del Estado de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría, cuyo objeto es la investigación, elaboración de estudios, modernización y desarrollo de los sistemas de transportación pública en la entidad.*

*Para tal efecto, el Instituto operará bajo un sistema de participación y consulta permanente con los sectores participantes en el transporte y los usuarios.*

*ARTÍCULO 147.- Los actos que emita el Instituto no constituyen actos administrativos decisorios, y serán de las siguientes clases:*

*I. Dictámenes: aquellos que con tal carácter emita conforme a este Reglamento.*

*II. Opiniones: todo desahogo de consulta que le sea cursada por la autoridad de transporte.*

*III. Propuestas: las conclusiones o resultados de su actividad de investigación.*

*IV. Laudos: Los que resulten de la instrucción de procedimientos arbitrales respecto de las contiendas internas de un mismo concesionario, entre diversos concesionarios, o entre éstos y terceras personas. Los laudos constituirán un acto decisorio sólo en lo que afecte los derechos privados de los particulares, si el mismo versare sobre derechos de concesiones o permisos, deberá ser ratificado por la autoridad de transporte, correspondiendo a esta la ejecución de esa parte de laudo.*

Como se advierte del propio fundamento aportado por el Sujeto Obligado, estas atribuciones no se relacionan en específico con la capacitación interna ni externa, por lo cual, al consultar el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, se puede identificar que las atribuciones relacionadas a la capacitación, inician con el Titular, conforme al artículo 7 fracción LVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, que contempla la promoción de la capacitación en materia de movilidad, transporte y seguridad vial, facultades que se delegan en la Subsecretaría de Movilidad, a las Direcciones Generales de Movilidad Zona I, II, III y IV, así como la Coordinación Administrativa.

Entonces, la Unidad de Transparencia, omitió realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en todas las áreas que podrían poseer la información, por lo cual, no se puede validar que se pronunció el único Servidor Público Habilitado competente para poseer la información.

Búsqueda exhaustiva de la información. Como se desarrolló en las líneas que preceden, la Secretaría de Movilidad, tiene facultades para capacitar, hacia el interior y el exterior; se reproducen las facultades de las áreas que tienen facultades para poseer los documentos:

*Artículo 7. Corresponden a la persona titular de la Secretaría las atribuciones siguientes:*

*…*

*LVI. Promover, con la participación de las autoridades y sectores involucrados, la investigación, educación, capacitación, desarrollo tecnológico, innovación e información en materia de movilidad, transporte y seguridad vial, considerando sus implicaciones sociales, económicas, urbanas y ambientales, así como realizar los estudios necesarios sobre transporte y circulación multimodal, y determinar las medidas técnicas y operaciones de todos los medios de transporte urbano;*

*…*

*Artículo 10. Corresponden a la Subsecretaría las siguientes atribuciones:*

*…*

*XIV. Promover y coordinar la organización y evaluación, con la participación de las autoridades y sectores involucrados, de la investigación, educación, capacitación, desarrollo tecnológico, innovación e información en materia de movilidad, transporte y seguridad vial considerando sus implicaciones sociales, económicas, urbanas y ambientales, así como instruir la realización de los estudios necesarios sobre transporte y circulación multimodal, para determinar las medidas técnicas y operaciones de todos los medios de transporte urbano;*

*…*

*Artículo 12. Corresponden a las Direcciones Generales de Movilidad Zona I, II, III y IV, en su respectiva circunscripción territorial, las atribuciones siguientes:*

*…*

*IV. Promover y organizar la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en materia de movilidad;*

*…*

*Artículo 17. Corresponden a la Coordinación Administrativa las atribuciones siguientes:*

*…*

*X. Impulsar las actividades de capacitación y adiestramiento de las personas servidoras públicas de la Secretaría;*

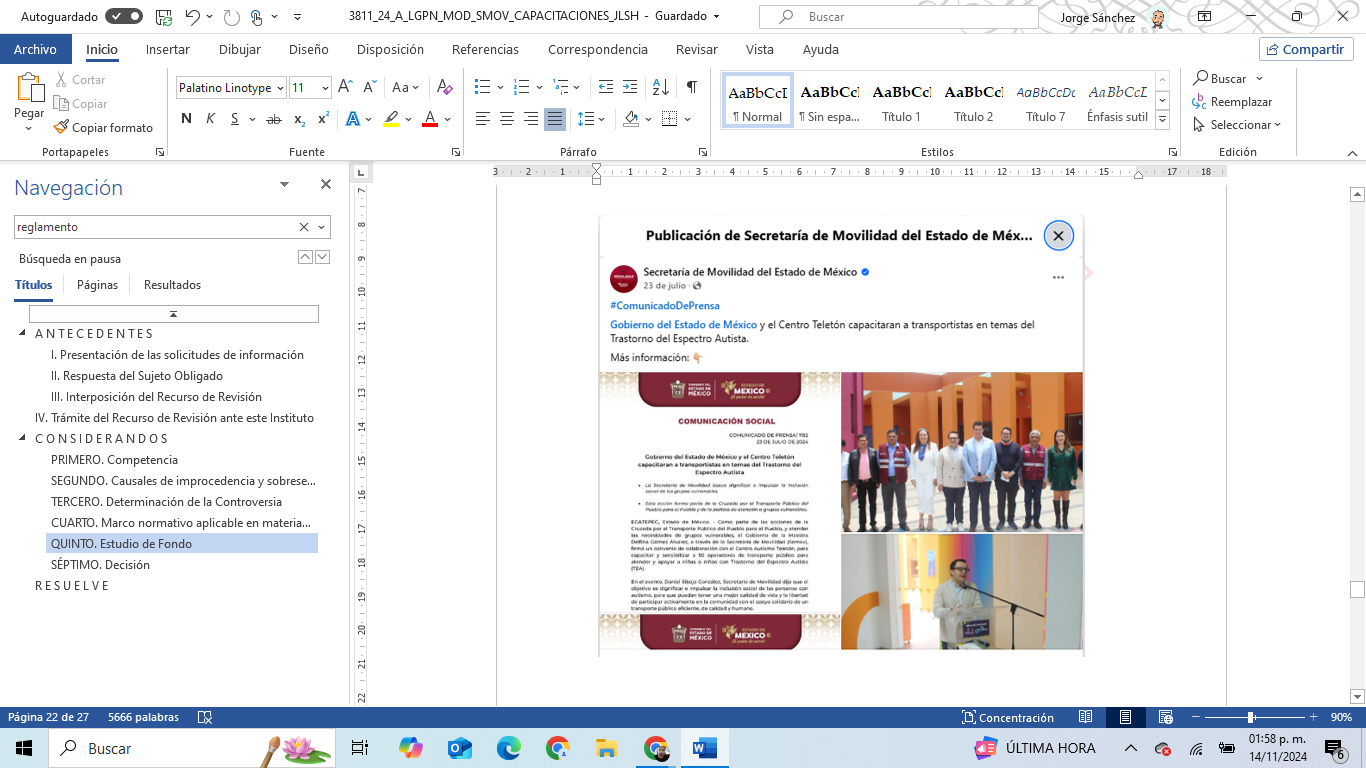
*…*

*XVI. Promover y coordinar las actividades de capacitación, y motivación de las personas servidoras públicas de la Secretaría;*

*…*

Entonces, normativamente existen otras áreas al interior del Sujeto Obligado, que cuentan con facultades para realizar o promover capacitaciones, como lo es la Subsecretaría, las Direcciones Generales de Movilidad por Zona o la Coordinación administrativa por lo que se deberá turnar la solicitud a todas las áreas en donde podría obrar la información.

Elementos que presumen la existencia de la información. Ahora bien, de la afirmación realizada por el Particular, respecto a que es un hecho conocido que se han llevado a cabo capacitaciones, se realizó una búsqueda de la información en medios digitales y se localizó que la Secretaría de Movilidad, publicó un curso que se brindó conjuntamente con Teletón a los transportistas, información publicada en la página oficial del Gobierno del Estado de México:



(Información recuperada el catorce de noviembre de dos mil veinticuatro a las trece horas con cincuenta y nueve minutos, de la liga de acceso directo <https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=807188604956061&id=100069947854764>)

Otro medio de comunicación que publicó este curso fue “El EdoMéx Informa” en la liga de acceso directo <http://edomexinforma.com.mx/gobierno-del-estado-de-mexico-y-el-centro-teleton-capacitaran-a-transportistas-en-temas-del-trastorno-del-espectro-autista/>, que publicó una nota que lleva por título *Gobierno del Estado de México y el Centro Teletón capacitaran a transportistas en temas del Trastorno del Espectro Autista,* la cual, también incluye a la empresa Ruta 30, como la empresa que inicia el curso.

Si bien las notas periodísticas, no permiten afirmar que nos encontramos ante hechos notorios, ni siquiera, otorgan certeza de la existencia de dichas capacitaciones, máxime de que, en ellas, se refiere a que son hechos que se realizarán, es decir, que a la fecha de la nota periodística son hechos futuros, por lo cual, únicamente sirven como un elemento de apoyo para la elaboración de la presente resolución. En este sentido, el turno se deberá realizar a todas las áreas en donde podría obrar la información y de poseerla, se deberá entregar, en su caso en versión pública.

Ahora bien, de no poseerla, el Sujeto Obligado, deberá obrar en términos del artículo 19 de la Ley de Transparencia, que contempla:

*Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.*

*Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.*

Esto significa que si los cursos fueron realizados con la participación de la Secretaría, la información debe obrar en sus archivos, pero de no haber formado parte de dichas capacitaciones, bastará con precisarlo.

## SEXTO. Versión pública

Es preciso señalar que para el caso de que la información que se ordena cuente con datos personales confidenciales, deberá entregarse en su versión pública acompañada del acuerdo que para tales efectos emita su Comité de Transparencia de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Al respecto de la versión pública, se precisa que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.

Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. En concordancia con lo previo, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que ésta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.

Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales. Por su parte, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).

Ante tales situaciones, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física identificada e identificable, como su nombre o imagen. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.

En este contexto, la confidencialidad de los datos personales tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre la particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales versus el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público.

En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso de los salarios de todos los servidores públicos, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales, entre otros; información que necesariamente está vinculada con datos personales, que pierden la protección en beneficio del interés público (no por eso dejan de ser datos personales, sólo que no están protegidos en la confidencialidad).

Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones públicas, la regla es clara, ya que los datos personales que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.

En consecuencia, aquellos datos que únicamente versan sobre la vida privada de las personas deberán ser eliminadas de las versiones pública, previa aprobación del Comité de Transparencia, por consiguiente, en virtud de que la persona Recurrente solicitó información sobre las personas capacitas del sector privado que no entran dentro del escrutinio a que obligan las leyes de transparencia, el nombre y todos los datos que los hagan identificados o identificables, deben ser protegidos y por ende eliminados en las versiones públicas, por tratarse de datos personales confidenciales.

Misma suerte aplica para operadores de transporte capacitados, pues constituyen trabajadores del sector privado y la información de estos como trabajadores actualiza el supuesto de confidencialidad como dato personal, respecto de su nombre y los datos personales que los hagan identificables.

Por lo que hace a la información de policías como se trata de información de elementos operativos, conviene señalar que la información respecto del personal de seguridad corresponde a información reservada; esto es, ya que los elementos operativos se dedican a combatir de manera directa a los delincuentes en el municipio, así como a prevenir la actividad delictiva. Entonces, conforme al artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas –Lineamientos Generales-, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o expedientes; por lo que, la clasificación de información se llevará a cabo mediante un análisis caso por caso.

Además, el artículo 131 de la Ley referida, así como el Quinto de los Lineamientos Generales, establecen que los sujetos obligados deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información.

Al respecto, el Octavo de los Lineamientos Generales, precisa lo siguiente:

• Para fundar la clasificación de la información se deberán señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley aplicable;

• Para motivar la clasificación se deberán indicar las razones y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada; la cual, en el caso de que se trate de información reservada, la motivación, deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de un determinado plazo de reserva.

En ese orden de ideas, el Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales establece la forma en que se debe fundamentar y motivar la reserva de la información, es decir, a través de los siguientes pasos:

• Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable de las Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o, en el presente caso, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, vinculándola con el Lineamiento específico;

• Se deberá demostrar que la publicidad de la información generaría un riesgo de perjuicio, que rebasa el interés público;

• Se acreditará el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado;

• Se precisará las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, por medio del riesgo real, demostrable e identificable;

• Se deberán señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

• Se elegirá la opción de excepción al acceso a la información que menos restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público.

De acuerdo con lo expuesto, el Sujeto Obligado, debe fundar y motivar la existencia de información reserva al momento del cumplimiento del Recurso, con la entrega del Acta del Comité con la prueba de daño respectiva, que es la argumentación fundada y motivada que se debe realizar para acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normatividad aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla, en términos del Trigésimo tercero de los Lineamientos Generales, relacionado con el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

El artículo 140, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, (homólogo a parte del artículo 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), prevé lo siguiente:

*“Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*…*

*IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*…”*

Del precepto legal anteriormente citado se desprende que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; para acreditar lo anterior, los Lineamientos Generales, establecen lo siguiente:

*“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.”*

Del Lineamiento referido, se desprende que para clasificar la información como reservada, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Además, el artículo 81, fracción III, de la Ley de Seguridad del Estado de México, establece que toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada cuando se trate de la relativa a los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones.

Conforme al citado artículo, se desprende que es reservada toda aquella información de los servidores públicos integrantes de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones.

En ese contexto, tal como se precisó en párrafos anteriores, los datos de servidores públicos, entre los que se encuentran el nombre de los trabajadores, por regla general, son de naturaleza pública, ya que su publicidad orienta a cumplir los objetivos que persigue la Ley.

No obstante, resulta necesario traer a colación por analogía, el Criterio 06/09, emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

*“Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.”*

De dicho criterio, se desprende que existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad pública, a través de acciones preventivas y correctivas, encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones; por lo que, una forma en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del País, Estado y Municipio, anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo.

En ese orden de ideas, si bien por regla general los nombres de los trabajadores gubernamentales son información pública de oficio, existe una excepción relativa a aquellos que realicen actividades operativas en materia de seguridad, como es el caso de los elementos operativos y la policía municipal.

Al respecto, el artículo 4° de la Ley de Seguridad del Estado de México prevé que la función de seguridad pública se realizará, en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de sentencias, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, de las instancias encargadas de aplicar las infracción administrativas, y de las demás autoridades de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas.

En ese contexto, el artículo 6, fracciones XI y XII de dicho ordenamiento jurídico, establece los siguientes conceptos:

• Instituciones Policiales: Son los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, detención preventiva, centros de arraigo y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal.

• Instituciones de Seguridad Pública: Instituciones Policiales, Procuración de Justicia, Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal.

Conforme a lo anterior, se puede deducir que procede la reserva de los nombres de personal operativo (policías) capacitados.

Ahora bien, no se omite señalar que las capacitaciones referidas, son supuestos que derivan del ejercicio de funciones que pudieron o no se ejercidos, esto en virtud de que si bien la Secretaría de Movilidad, cuenta con atribuciones para capacitar, estas puntualmente no refieren a policías y respecto a instituciones públicas o privadas, al ser facultativo; por lo que, en el caso de no contar con información, bastará con hacerlo del conocimiento en dichos términos.

Por último, no se omite señalar que el Particular, requirió aviso de privacidad, relacionado a recopilar datos personales de los Participantes; al respecto, debemos señalar que el Aviso de Privacidad es el documento que se origina para comunicar a los Titulares de los Datos Personales, cual es el tratamiento que se le dará a los mismos.

Al respecto, debemos enfatizar que para el efecto de los eventos realizados, recabar datos personales, encuentra sintonía con el uso que se les dará, por lo cual, recabar o no datos personales, es una determinación interna de los Sujetos Obligados, para el caso de la naturaleza de estos eventos, pues no existe fuente obligacional que los constriña a ello, por lo cual, dicho aviso de privacidad, es obligatorio en el caso de recopilar datos personales, pero de no haberse solicitado los datos de los participantes, bastará con que así se precise al Particular.

## SÉPTIMO. Decisión

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **MODIFICAR** la respuesta otorgada a la solicitud de información.

**Términos de la Resolución para conocimiento del Particular**

Se le hace del conocimiento al Particular, que, en el presente caso se le concede la razón, pues en efecto, el Sujeto Obligado no se pronunció por conducto de todas las áreas que podrían poseer la información, por lo que deberá hacer una nueva búsqueda de la información y en su caso, hacer entrega de la misma.

Finalmente, se le informa que la labor de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de los datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

# R E S U E L V E

**PRIMERO.** Se **MODIFICAN** las respuestas otorgadas por la Secretaría de Movilidad a las solicitudes de acceso a la información **00332/SMOV/IP/2024** y **00331/SMOV/IP/2024**, por resultar **FUNDADOS** los agravioshechos valer por el Particular, en los Recursos de Revisión **03811/INFOEM/IP/RR/2024** y **03812/INFOEM/IP/RR/2024,** en términos de los Considerandos QUINTO y SÉPTIMO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Sujeto Obligado, a efecto de que, previa búsqueda exhaustiva y razonable en las áreas competentes, entregue a través del SAIMEX en su caso en versión pública:

1. Sobre las capacitaciones otorgadas a policías, instituciones públicas y privadas incluida Teletón, del diez de mayo de dos mil veintitrés al diez de mayo de dos mil veinticuatro:
   1. Material de esas capacitaciones
   2. Fecha de la capacitación
   3. Nombre de las personas servidores públicos capacitados
   4. Aviso de privacidad para recabar datos
   5. Presupuesto asignado para esas capacitaciones
   6. Documentos soporte de la erogación de recursos.
   7. Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se clasifique como confidencial el nombre de las personas de instituciones privadas que hayan sido capacitadas, por tratarse de datos personales confidenciales y como reservado el nombre de elementos operativos.
2. Sobre las capacitaciones otorgadas a operadores de transporte público en los últimos 9 meses (del diez de agosto de dos mil veintitrés al diez de mayo de dos mil veinticuatro):
   1. Número de operadores capacitados.
   2. Escuela o institución que implementó la capacitación.
   3. Constancias de los operadores capacitados (servidores públicos), identificados con nombre, ruta y/o sitio al que pertenece.
   4. Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se clasifique como confidencial el nombre de las personas de instituciones privadas que hayan sido capacitadas, por tratarse de datos personales confidenciales.

Junto con las versiones públicas deberá proporcionar el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos clasificados como confidenciales y en su caso como reservado, en la versión pública, en términos del considerando QUINTO de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II, 140, fracción IV y 143, fracción I y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso de que la información que se ordena en el punto 1, no obre en sus archivos por no haber participado en capacitaciones, en determinado periodo, bastará con que se precise al Particular de manera precisa y clara.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de la materia, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** a la persona Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables o recurso de inconformidad de acuerdo con lo señalado en los artículos 156 y 160, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA CON VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.